



Tiempo de lectura: 4 min.

[Soledad Morillo Belloso](#)

Yo no soy economista, ni experta financiera, ni abogada conocedora de la materia de deudas. Soy, sí, una de los millones de venezolanos con el sello en la frente de “deudor” en “flashing colors”. Y eso, supongo, me da derecho —aun desde mi ignorancia— a expresarme sobre el espinoso y doloroso asunto de la deuda que los venezolanos cargamos como un fardo pesado sobre nuestras espaldas.

Comencemos por decir que el monto que debemos es tan estrafalario que da grima. No es una cifra: es una bofetada. Una suma tan descomunal que parece escrita por un enemigo para humillarnos, no por un gobierno para administrarnos.

La deuda externa venezolana es una herida que no sangra hacia afuera, pero supura hacia adentro. No es apenas y sin penas un cúmulo de obligaciones impagables: es la memoria de un país que gastó como si el futuro fuese un pozo sin fondo y luego despertó con la resaca de un festín ajeno. La deuda es un espejo incómodo: refleja la improvisación, la opacidad, la arrogancia de creer que el petróleo era un dios doméstico que nunca se enfriaría.

Durante los años de bonanza, cuando el barril se paseaba por las nubes, Venezuela se endeudó como si estuviera en ruinas. Se emitieron bonos a manos llenas, se hipotecó PDVSA, se firmaron compromisos con China, con Rusia, con quien quisiera prestar. Era un endeudamiento sin pudor, sin auditoría, sin freno. Además, regalamos a manos llenas. Sin duda, el gobierno más sifrina y rastacuero de toda nuestra historia. Y cuando el ciclo se quebró, cuando la producción cayó y la caja se vació, llegó el silencio: en 2017 el país dejó de pagar. No hubo anuncio solemne ni mea culpa. Simplemente se apagó el teléfono para no escuchar al acreedor.

Desde entonces, la deuda se convirtió en un laberinto jurídico. Bonistas dispersos por el mundo, fondos litigantes oliendo oportunidad, laudos arbitrales por expropiaciones mal hechas, demandas en cortes de Nueva York, amenazas sobre activos externos como CITGO. Cada acreedor con su carpeta, cada carpeta con su pleito, cada pleito con su reloj. Y Venezuela, atrapada en un default que se volvió paisaje.

Negociar esa deuda es entrar a un cuarto donde todos hablan a la vez y nadie quiere ceder primero. No es una mesa: es un archipiélago de intereses. Los bonistas quieren reestructuración con quitas razonables. Los litigantes quieren cobrar completo. Los países “aliados” quieren trato preferencial. Los organismos multilaterales piden transparencia. Y Venezuela, con una economía exhausta, apenas puede ofrecer promesas de disciplina futura.

Y aquí aparece la pregunta incómoda, la que nadie quiere formular en voz alta: ¿quién debe negociar la deuda venezolana? Porque sentarse frente a los acreedores no es un acto administrativo: es un acto de Estado. Y ahí está el dilema. ¿Quién representa hoy al Estado venezolano en un proceso tan delicado, tan largo, tan lleno de trampas jurídicas y de memoria tóxica? Negociar esta deuda exige un equipo mixto, plural, con economistas que entiendan de sostenibilidad fiscal, abogados que conozcan las cortes de Nueva York como si fueran su patio, diplomáticos capaces de leer silencios, y políticos que sepan que cada palabra compromete al país por décadas. No basta con funcionarios obedientes ni con tecnócratas brillantes pero aislados. Se necesita una delegación que combine legitimidad democrática, respaldo institucional y reconocimiento internacional. Una delegación que pueda mirar a los acreedores a los ojos y decir: “Luego de una auditoría detallada y revisada, esto es lo que Venezuela debe, esto es lo que puede pagar, esto es lo que Venezuela no puede volver a hacer”. Y, sobre todo, se necesita que quienes negocien lo hagan pensando en el país que viene, no en el que se derrumbó. Porque la deuda no la

pagan los gobiernos: la pagan los ciudadanos, los que nacieron antes del desastre y los que nacerán después.

La deuda externa no es sólo un problema financiero. Es un recordatorio de cómo se deshace un país cuando confunde riqueza con abundancia, poder con impunidad, futuro con improvisación. Y la negociación, si alguna vez se concreta de manera seria, será menos un trámite técnico que un acto de madurez: aceptar que no se puede vivir eternamente de lo que no existe.

La deuda que cargamos no es sólo un número grotesco ni un error contable: es la prueba viviente de que un país puede ser llevado al borde del abismo por la mezcla letal de soberbia, improvisación y silencio. Y lo más doloroso es que, mientras los responsables se esconden detrás de discursos huecos, somos nosotros —los deudores involuntarios, los que nunca firmamos un solo papel— quienes pagamos la factura. Pagamos con hospitales sin gasas, con escuelas sin tizas, con salarios que dan vergüenza, con hijos que se van porque aquí no hay cómo sostenerlos.

La deuda externa es el recordatorio de que Venezuela no se rompió sola: la rompieron. Y ahora, cuando llegue la hora de negociar, más vale que quienes se sienten a esa mesa entiendan que no están jugando dominó ni repartiendo cuotas de poder. Están decidiendo cuántas décadas más cargaremos este yugo. Están decidiendo si seguimos siendo un país hipotecado o si, por fin, empezamos a comportarnos como una nación adulta.

Porque si algo nos ha enseñado esta tragedia es que la irresponsabilidad también se hereda. Y ya estuvo bueno de herencias envenenadas.

Soledadmorillobelloso@gmail.com

[ver PDF](#)

[Copied to clipboard](#)